



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, once de agosto de dos mil veintitrés

22-266

Proceso: **ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN**
Demandante: **RICARDO ANTONIO QUIRÓZ GARCÍA**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-004-2020-00226-01**
Decisión: **CONFIRMA SENTENCIA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, toda vez que la magistrada **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA** se encuentra ausente de manera justificada, procede a conocer a resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 27** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Pretende la parte actora se condene a COLPENSIONES al reconocimiento y pago los intereses moratorios regulados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993 por la mora en el reconocimiento de la pensión de vejez, desde el 30 de noviembre de 2017, fecha en la que la entidad negó el reconocimiento pensional en la resolución sub 259819 y hasta el 30 DE JUNIO 2019, por la suma de \$34.257.796 o en subsidio la indexación del retroactivo pensional reconocido en la resolución DPE 5560 08 julio 2019 que asciende a la suma de \$12.350.735, lo que ultra y extra petita resulte probado y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EN SÍNTESIS, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que nació el 31 de agosto de 1959 por lo que en la actualidad cuenta con más de 60 años de edad.
- Que laboró como trabajador oficial para UNE EPM.
- Que el 27 de octubre de 2017 solicitó a COLPENSIONES la pensión de vejez la cual le fue negada a través de la Resolución SUB 259819 del 17 de noviembre de 2017 por no acreditar 62 años de edad.
- Que el 26 de febrero de 2019 solicitó nuevamente a COLPENSIONES la pensión de vejez, siéndole negada nuevamente mediante resolución SUB 112887 del 11 de mayo de 2019 por no cumplir los 62 años exigidos en la Ley 100 de 1993, contra la cual se interpuso el recurso de apelación.
- Que a través de la Resolución DPE 5560 de 2019 se resolvió el recurso de apelación revocando la resolución anterior, revocando la resolución anterior y reconociendo la pensión de vejez conforme a la Ley 33 de 1985 a partir del 15 de noviembre de 2015 en cuantía de \$1.887.113 concediendo un retroactivo de \$95.327.047; sin embargo no se reconocieron intereses moratorios ni indexación sobre el mismo.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió COLPENSIONES el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que acepta como ciertos los relativos a la edad del actor, su calidad de trabajador oficial al servicio de EPM, las solicitudes efectuadas ante la entidad y el contenido de las resoluciones expedidas, tanto las que negaron la pensión de vejez como la que finalmente la reconoció.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 7 de octubre de 2022 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, **CONDENÓ** a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar al señor **RICARDO ANTONIO QUIROZ GARCÍA**:

- La suma de **\$31.581.332** por concepto de intereses moratorios en el pago de las mesadas pensionales liquidados desde del 1º de marzo de 2018 hasta el 31 de julio de 2019.

- La indexación de la anterior suma a partir del 1º de agosto de 2019 y hasta la fecha del pago efectivo.
- Y las cosas del proceso, fijando las agencias en derecho en la suma de \$3.000.000.

2. ARGUMENTOS

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Conforme lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en el caso de las pensiones de vejez hay lugar a intereses moratorios cuando la entidad no reconoce la prestación dentro de los cuatro meses siguientes a la solicitud con el lleno de requisitos. Estimó que en el caso de autos se encuentra probado que el señor RICARDO ANTONIO QUIROZ GARCIA solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez el 27 de octubre de 2017 prestación que le fue inicialmente negada indicando que no cumplía los requisitos para acceder a la pensión de vejez conforme a la Ley 100 de 1993, aunque posteriormente le fue reconocida a través de Resolución DPE 5560 del 8 de julio de 2019 toda vez que el actor cumplía con los requisitos para acceder a la prestación conforme a la Ley 33 de 1985 por ser beneficiario del régimen de transición, beneficio que conservó pese a haberse trasladado al RAIS y haber regresado al RPM ya que contaba con 15 años de servicios al 30 de junio de 1995, conforme lo estipulado por la Corte Constitucional en sentencias C-789 de 2002, C-754 de 2004, C-1024 de 2004, SU-062 de 2010, SU-130 de 2013 y SU-856 de 2013 y los Decretos 3800 de 2003 y 3995 de 2008.

Por tanto concluyó el a quo que era procedente condenar a los intereses moratorios a partir del 1º de marzo de 2018 cuando venció el plazo de 4 meses para para reconocer la prestación, dado que la negativa de la entidad estuvo injustificada, por lo que condenó al pago de intereses a partir del 1º de marzo de 2018 y hasta el 31 de julio de 2019, los cuales ascienden a \$31.581.332

Finalmente estimó que era procedente condenar a la entidad a indexar la suma adeudada por intereses moratorios a partir del 1º de agosto de 2019, cuando debió cancelarse la misma, pues cuando esta se pague se habrá visto deteriorada o envilecida por el paso del tiempo, la cual se deberá calcular hasta la fecha de pago.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN DE COLPENSIONES

Señaló que si bien el despacho condenó al reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 1° de marzo de 2018 hasta el 31 de julio de 2019, la fecha correcta sería hasta el 30 de junio de 2019 cuando fue incluido en nómina de pensionados por lo que debe modificarse la sentencia en este aspecto. De otro lado indicó que debe revocarse la condena a la indexación toda vez que los intereses moratorios tienen el efecto de resarcir o traer a valor presente el dinero por la pérdida del valor adquisitivo del dinero y la indexación es casi en similares condiciones al reconocimiento de intereses.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Presentaron alegatos Colpensiones y la parte actora ratificando los argumentos expuestos tanto en la demanda como en la contestación de la misma y en el recurso de apelación.

En primer lugar, Colpensiones señaló que los intereses moratorios no deben calcularse hasta el 31 de julio de 2019 sino hasta junio de 2019, pues conforme a la resolución de reconocimiento esta fue la fecha de inclusión en nómina. De otro lado adujo que los intereses moratorios no eran procedentes por cuanto no existía una pensión legalmente reconocida que se hubiera dejado de cancelar ya que una vez le fue concedida la prestación le ha sido cancelada de forma puntual al actor. También indicó que la entidad tenía un término de 6 meses para resolver la prestación conforme al Decreto 656 de 1994 y no de 4 meses como lo indicó el a quo. Así mismo insistió en que no es procedente la condena a la indexación sobre los intereses moratorios, pues estos son valores que se cancelan trayéndose a valor presente y asumir que COLPENSIONES debe de estos valores realizar indexación desde el 1 de agosto de 2019 y hasta el pago de la obligación estaría condenándose a la entidad a un doble pago de valores traídos a valor presente y se estaría configurando un detrimento a la entidad e incluso afectando la estabilidad financiera del sistema.

De otro lado, el demandante manifestó que debe confirmarse la sentencia de primera instancia, pues conforme la sentencia de Corte Suprema de Justicia SL1681-2020 con radicado 75127, magistrada ponente Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. La corte es enfática y reitera que no hay una razón objetiva para excluir a los pensionados del régimen de transición con Ley 33 de 1985 y Ley 71 de 1988 entre otras, del derecho a percibir los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque es evidente que de alguna manera se afecta su mínimo vital. Por tanto, como en el caso de autos, el reconocimiento de la pensión se dio excediendo el plazo de los 4 meses con

que contaba la entidad para reconocer el derecho, sin que el retraso tuviera justificación alguna, es procedente el pago de los intereses moratorios, así como de la indexación de estos para compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda por el transcurso del tiempo.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Consiste en determinar si es viable el reconocimiento de los intereses moratorios regulados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo de la pensión de vejez reconocido a la demandante y hasta que fecha deben liquidarse. Dependiendo de ello se analizará si es procedente la condena a la indexación sobre la suma adeudada por intereses moratorios.

Así mismo se revisará en CONSULTA los temas que no fueron apelados y que le fueron adversos a COLPENSIONES con el fin de salvaguardar los intereses del Estado como garante de esta entidad, conforme a lo señalado por nuestro órgano de cierre en sentencias 51237 de 4 de diciembre 2013 y 40.200 de 2015.

CONSIDERACIONES

En primer lugar, en relación los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que, al tenor de la referida norma, estos se causan por la simple mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales, por lo que inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la prestación se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender a criterios de buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico. Sin embargo, tal posición se fue morigerando a partir de la sentencia con radicado 44454 del 2 de octubre de 2013, dada una nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que dichos intereses no eran procedentes en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encuentren justificadas, bien sea porque tenga respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento dado le haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

Aunado a lo anterior, para la Sala la tesis del apoderado de COLPENSIONES en sus alegatos, según la cual los referidos intereses no se generan sino cuando existe para el administrado una

pensión reconocida y a pesar de ello se omite la obligación de cancelarla oportunamente, no comporta una correcta intelección de la norma, toda vez que la obligación de pago surge, en éste caso, cuando el beneficiario acredita el cumplimiento de los requisitos estipulados en la Ley para disfrutar de la pensión y eleva la solicitud pertinente al ente administrador pues éstos no operan de manera automática con la ocurrencia del hecho físico que genera el derecho a la pensión, sino que es preciso que haya una reclamación, pues sólo a partir de la misma empiezan a correr los términos de ley para que la Administradora del Fondo de Pensiones la reconozca o no y, se pueda hablar de mora y como consecuencia empiecen a generar los intereses referidos.

En el caso de la pensión de vejez se causan cuatro meses después de la presentación de la solicitud, toda vez que es el tiempo establecido en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 para que la entidad o fondo de pensiones resuelva sobre el derecho, norma especial y posterior, razón por la que no es viable acudir a lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 700 de 2001, que para los efectos se entiende derogado. Ello es lo que ha considerado la Corte Suprema de Justicia en múltiples providencias como la 49831, 72383 de 2018 y 59878 y 62301 de 2019.

De otro lado, debe indicarse que si bien al señor RICARDO ANTONIO QUIROZ GARCÍA se le reconoció la pensión de vejez de conformidad con el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de 1985, conforme a la Resolución DPE5560 de 2019, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1681-2020, rectificó el criterio vigente hasta entonces, para precisar que los intereses se aplican a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100. En dicha sentencia la Corte estimó que:

*“...el artículo 53 de la Constitución Política obliga al Estado y a las entidades de previsión social a garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las **pensiones legales**», premisa que no distingue la fuente legal o el tipo de pensión y, por tanto, no hay una razón objetiva y plausible para excluir a los pensionados del régimen de transición del derecho a percibir los intereses moratorios, con mayor razón si se tiene en cuenta que, sin distinción alguna, todos ellos pueden ver comprometido su mínimo vital y sufrir perjuicios con ocasión de la dilación injustificada en el pago de las pensiones.”*

En esta sentencia la Corte explicó que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 tuvo el propósito de superar las viejas discusiones doctrinales y jurisprudenciales en torno a la manera de resarcir los perjuicios ocasionados por la mora en el pago de las pensiones, por lo que se trata de una regulación unificadora, aplicable a todo tipo de pensiones, sin importar su origen legal.

De otro lado, la Corte Constitucional ha sido más amplia en su interpretación, al considerar que los referidos intereses se aplicaban a todo tipo de pensiones incluidas las de carácter extralegal y las reconocidas con normatividad anterior a la Ley 100 de 1993.

En la Sentencia C-601 de 2000, la Corte conoció la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en la cual el demandante expresó que *“los segmentos normativos “A partir del 1º de enero de 1994” y “de que trata esta ley”, contenidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993”, vulneran el derecho fundamental a la igualdad (art. 13 CP) de aquellas personas que bajo la vigencia de leyes anteriores a la Ley 100 de 1993, obtuvieron el derecho al reconocimiento y pago de su pensión, al excluirlas del reconocimiento y pago de los intereses moratorios con ocasión del pago tardío de las mesadas pensionales. En esta oportunidad la Corte declaró exequibles los apartados demandados tras considerar que el artículo 141 parcialmente cuestionado no desconocía el artículo 13 Superior, en tanto que la comprensión correcta de esa prescripción indica que se aplica a todo tipo de pensiones, sin distinción alguna. Tal conclusión se derivó de la interpretación de la mencionada disposición, la cual se sustentó en las siguientes premisas argumentativas:*

“(…)

- (i) El reconocimiento de los intereses moratorios tiene por finalidad proteger a las personas de la tercera edad, quienes debido a su estado de salud o físico “se encuentran imposibilitadas para obtener otra clase de recursos para su propia subsistencia o la de su familia”, por lo que el pago tardío de sus mesadas pensionales puede comprometer su mínimo vital;*
- (ii) El artículo 141 de la ley 100 de 1993 incorporó en el ordenamiento jurídico colombiano “un mecanismo de liquidación para cancelar las pensiones atrasadas o en mora, sin que el legislador distinguiera en el tiempo o en el espacio a determinados grupos de pensionados”;*
- (iii) La disposición acusada no crea ningún tipo de distinciones entre pensionados o clases de pensiones. En realidad, el legislador estableció una distinción el tiempo, es decir, en el momento en el cual se produce la mora para efectos de saber cuál es la normatividad vigente con base en la que deberá hacerse su cálculo.*
- (iv) La correcta interpretación del enunciado legal censurado “advierde que a partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las pensiones a que se refiere la ley, esto es, las pensiones que tienen como origen el fenómeno laboral de la jubilación, la vejez, la enfermedad o la sustitución por causa de muerte, que se presente después de esa fecha, el pensionado afectado, sin importar bajo la vigencia de qué normatividad se le reconoce su condición de pensionado, tendrá derecho al pago de su mesada y sobre el importe de ella la tasa máxima del interés moratorio vigente. Es decir, la disposición acusada no distingue entre pensionados, pues, sólo alude al momento en el cual se produce la mora para efectos de su cálculo”.*

De otro lado, en sentencia SU-065 de 2018 señaló:

“En este orden de ideas, la Sala Plena considera que la decisión impartida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 23 de noviembre de 2016 en relación con la absolución de la condena de los intereses moratorios significó la configuración de un defecto sustantivo, al desconocer un fallo con efecto erga omnes. Nótese que se reprocha que la autoridad judicial accionada hubiese negado esa pretensión con fundamento en que dichos réditos solo se aplican a aquellas pensiones que hayan sido reconocidas íntegramente bajo los parámetros de la Ley 100 de 1993, por lo que son improcedentes respecto de pensiones convencionales. Lo anterior, en razón de que la postura reseñada soslaya que en Sentencia C-601 de 2000, la Corte Constitucional manifestó que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 son aplicables a toda clase de pensiones, sean estas reconocidas por mandato legal, convencional o particular¹.

La regla judicial fijada en el marco de control abstracto se replicó en la jurisprudencia en vigor de las salas de revisión de la Corte Constitucional. De ahí que, se hayan precisado las siguientes premisas normativas: (i) “dicho mandato jurídico no distingue entre las personas que se pensionaron bajo la normativa anterior a la Ley 100 y quienes lo hicieron en virtud de ésta, sólo indica que si la mora se produjo con anterioridad a 1° de enero de 1994, ésta se deberá calcular conforme a la normativa vigente en ese momento, mientras que, si se produjo después de esa fecha, su valor se debe calcular de acuerdo al citado artículo 141”²; y (ii) los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 “proceden para todo tipo de pensión, sin importar la ley o el régimen mediante los cuales se causaron”³. (subrayas de la Sala)

De lo anterior, se colige que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 son aplicables a todo tipo de pensiones, sin importar si la pensión se reconoció conforme a una norma anterior a la Ley 100 de 1993, pues si la mora se produjo con posterioridad al 1° de abril de 1994 los mismos se deben calcular conforme a dicho artículo.

En el caso puesto a consideración de ésta Sala tenemos que la reclamación de la pensión de vejez se realizó el **27 de octubre de 2017**, conforme se desprende a folio 30 del archivo 02 del expediente digital en la Resolución SUB 259819 de 2019, por lo que a partir de dicha fecha empezaría a correr el término de 4 meses para el reconocimiento de la prestación, pues para entonces ya el actor había cumplido con suficiencia los requisitos para acceder a la pensión de vejez, dado que acreditaba 55 años de edad y más 20 años de servicio, sin embargo la entidad inicialmente le negó la pensión con el argumento que acreditaba los requisitos de la Ley 797 de 2003, desconociendo que era beneficiario del régimen de transición, como finalmente lo reconoció en la Resolución DPE 5560 de 2019, donde se da cuenta que el señor QUIROZ GARCIA pese a haberse trasladado al RAIS había conservado dichos beneficios pues al 30 de junio de 1995 tenía más de 15 años de servicios, cumpliendo los requisitos de las sentencias C-789 de 2002, C-754 de 2004, C-1024 de 2004, SU-062 de 2010, SU-130 de 2013 y SU-856 de 2013 por lo que se le concedió la pensión a partir del 15 de noviembre de 2015.

¹ Sentencia C-367 de 1995, C-601 de 2000, T-849A de 2013 y SU-230 de 2015.

² Sentencia T-849 A de 2013.

³ Sentencia SU-230 de 2015.

Por tanto concluye la Sala que la negativa de la entidad y su retraso en el reconocimiento de la pensión no estuvieron justificados y por tanto son procedentes los intereses moratorios como de forma acertada lo analizó el a quo, los cuales son procedentes, 4 meses después de la solicitud, es decir a partir del 28 de febrero de 2018, sin embargo como el juez indicó que sería a partir del 1º de marzo de 2018 y dicho punto no fue apelado por la parte actora, no se modificará para no hacer más gravosa la situación de Colpensiones. Así mismo estos intereses deben calcularse hasta el 31 de julio de 2019, como de forma acertada lo indicó el a quo, pues según se desprende de la referida resolución DPE 5560 el retroactivo adeudado al actor fue ingresado en la nómina de julio de 2019 pagadera en agosto, por tanto solo hasta entonces cesó la mora de la entidad.

En virtud de la CONSULTA se revisó la liquidación de los intereses moratorios, así:

Fecha del cálculo	1-ago-19
Período	20198
Interés Bancario Corriente	19,32%
Tasa E.A. Moratoria	28,98
Tasa Nominal Anual	25,72%
Tasa Nominal Diaria	0,0704671%

Período						Liquidación sobre mesadas diferentes al salario mínimo	
Desde	Hasta	Fecha de mora	Diferencia en días	# Mesadas		Valor pensión	Intereses
1-nov-15	30-nov-15	1-mar-18	518	0,5		\$ 998.557	\$ 364.493
1-dic-15	31-dic-15	1-mar-18	518	2		\$ 3.994.226	\$ 1.457.970
1-ene-16	31-ene-16	1-mar-18	518	1		\$ 2.132.318	\$ 778.337
1-feb-16	29-feb-16	1-mar-18	518	1		\$ 2.132.318	\$ 778.337
1-mar-16	31-mar-16	1-mar-18	518	1		\$ 2.132.318	\$ 778.337
1-abr-16	30-abr-16	1-mar-18	518	1		\$ 2.132.318	\$ 778.337
1-may-16	31-may-16	1-mar-18	518	1		\$ 2.132.318	\$ 778.337
1-jun-16	30-jun-16	1-mar-18	518	1		\$ 2.132.318	\$ 778.337
1-jul-16	31-jul-16	1-mar-18	518	1		\$ 2.132.318	\$ 778.337
1-ago-16	31-ago-16	1-mar-18	518	1		\$ 2.132.318	\$ 778.337
1-sep-16	30-sep-16	1-mar-18	518	1		\$ 2.132.318	\$ 778.337
1-oct-16	31-oct-16	1-mar-18	518	1		\$ 2.132.318	\$ 778.337
1-nov-16	30-nov-16	1-mar-18	518	2		\$ 4.264.635	\$ 1.556.675
1-dic-16	31-dic-16	1-mar-18	518	1		\$ 2.132.318	\$ 778.337
1-ene-17	31-ene-17	1-mar-18	518	1		\$ 2.254.926	\$ 823.092
1-feb-17	28-feb-17	1-mar-18	518	1		\$ 2.254.926	\$ 823.092
1-mar-17	31-mar-17	1-mar-18	518	1		\$ 2.254.926	\$ 823.092
1-abr-17	30-abr-17	1-mar-18	518	1		\$ 2.254.926	\$ 823.092
1-may-17	31-may-17	1-mar-18	518	1		\$ 2.254.926	\$ 823.092
1-jun-17	30-jun-17	1-mar-18	518	1		\$ 2.254.926	\$ 823.092
1-jul-17	31-jul-17	1-mar-18	518	1		\$ 2.254.926	\$ 823.092
1-ago-17	31-ago-17	1-mar-18	518	1		\$ 2.254.926	\$ 823.092
1-sep-17	30-sep-17	1-mar-18	518	1		\$ 2.254.926	\$ 823.092
1-oct-17	31-oct-17	1-mar-18	518	1		\$ 2.254.926	\$ 823.092
1-nov-17	30-nov-17	1-mar-18	518	2		\$ 4.509.852	\$ 1.646.184
1-dic-17	31-dic-17	1-mar-18	518	1		\$ 2.254.926	\$ 823.092
1-ene-18	31-ene-18	1-mar-18	518	1		\$ 2.347.152	\$ 856.756
1-feb-18	28-feb-18	1-mar-18	518	1		\$ 2.347.152	\$ 856.756
1-mar-18	31-mar-18	1-abr-18	487	1		\$ 2.347.152	\$ 805.483
1-abr-18	30-abr-18	1-may-18	457	1		\$ 2.347.152	\$ 755.864
1-may-18	31-may-18	1-jun-18	426	1		\$ 2.347.152	\$ 704.591
1-jun-18	30-jun-18	1-jul-18	396	1		\$ 2.347.152	\$ 654.972
1-jul-18	31-jul-18	1-ago-18	365	1		\$ 2.347.152	\$ 603.699
1-ago-18	31-ago-18	1-sep-18	334	1		\$ 2.347.152	\$ 552.426
1-sep-18	30-sep-18	1-oct-18	304	1		\$ 2.347.152	\$ 502.807
1-oct-18	31-oct-18	1-nov-18	273	1		\$ 2.347.152	\$ 451.534
1-nov-18	30-nov-18	1-dic-18	243	2		\$ 4.694.305	\$ 803.829
1-dic-18	31-dic-18	1-ene-19	212	1		\$ 2.347.152	\$ 350.642

1-ene-19	31-ene-19	1-feb-19	181	1	\$ 2.421.792	\$ 308.888
1-feb-19	28-feb-19	1-mar-19	153	1	\$ 2.421.792	\$ 261.105
1-mar-19	31-mar-19	1-abr-19	122	1	\$ 2.421.792	\$ 208.201
1-abr-19	30-abr-19	1-may-19	92	1	\$ 2.421.792	\$ 157.004
1-may-19	31-may-19	1-jun-19	61	1	\$ 2.421.792	\$ 104.101
1-jun-19	30-jun-19	1-jul-19	31	1	\$ 2.421.792	\$ 52.904
1-jul-19	31-jul-19	1-ago-19	0		\$ -	\$ -
1-ago-19	31-ago-19	1-sep-19	-31		\$ -	\$ -
					\$ 107.070.676 Retroactivo	\$ 31.632.604 Intereses

Encontrando que los mismos ascienden a la suma de **\$31.632.604**, suma ligeramente superior a la de **\$31.581.332** liquidada por el a quo, sin embargo, como dicho punto no fue apelado por la parte actora y el mismo se revisa en CONSULTA no se hará ninguna modificación para no hacer más gravosa la situación de la entidad.

De otro lado, estima la Sala que es procedente ordenar la **INDEXACIÓN** de la suma adeudada por concepto de intereses moratorios, pues conforme lo ha definido la Sala Laboral de la Corte Suprema Justicia a partir de las sentencias con radicado 29531 del 5 de diciembre de 2007 y 32020 del 6 de diciembre del mismo año que unificaron el criterio que ahora resulta imperante sobre la materia, la indexación no es una condena en sí misma considerada, sino que corresponde a un fenómeno económico consistente en la compensación dineraria por el transcurso del tiempo, que responde a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Por tanto en el caso de autos resulta viable dicha condena, pues los intereses moratorios debieron ingresar a al patrimonio del actor en agosto de 2019 y cuando la entidad cancele la suma adeudada ya se habrá visto depreciada o envilecida por el paso del tiempo, por lo que resulta acertada la condena del a quo de indexar la suma adeudada por intereses a partir del **1º de agosto de 2019**, de ahí que NO sea concurrente con la condena a intereses moratorios, pues su tasación lo fue hasta el día anterior.

En consecuencia la sentencia de primera instancia será CONFIRMADA en su integridad.

Costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

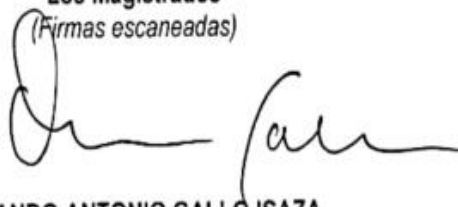
Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 7 de octubre de 2022 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor **RICARDO ANTONIO QUIROZ GARCIA** identificado con c.c. 3.481.436 contra **COLPENSIONES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Sin firma por ausencia justificada



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **RICARDO ANTONIO QUIRÓZ GARCÍA**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-004-2020-00226-01**
Decisión: **CONFIRMA SENTENCIA**
Fecha de la sentencia: **11/08/2023**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **14/08/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario